

La unidad contra la dictadura, vía y formas de lucha

Luis CORVALAN,
Secretario General del CC
del Partido Comunista de Chile (PCCh)

Las grandes luchas populares que han tenido lugar en Chile en el mes de septiembre de 1985 remecieron fuertemente a la dictadura de Pinochet y alcanzaron amplio eco internacional. El régimen fascista vive sus momentos más difíciles. Las jornadas de protesta han creado una situación nueva. Pinochet ha sido ya abandonado por la mayoría de sus amigos de la derecha. Aparecen discrepancias entre los miembros de su gabinete y pugnas en las instituciones armadas, en las cuales se considera la cuestión de cómo salir del embrollo en que se metieron.

El golpe de septiembre de 1973 se dio con el pretexto de salvar a Chile del comunismo y del caos económico. Lo que hizo en verdad fue derribar a un gobierno democrático que construía con éxito una economía independiente en medio de dificultades creadas por el imperialismo y la reacción interna. Transcurridos esos años se puede constatar que el Partido Comunista no sólo no ha sido destruido sino que se erige como la fuerza más combativa de la oposición, con influencia creciente, en tanto la dictadura fascista está en franca descomposición. Se puede constatar también que ha sido la dictadura la que ha conducido al país al caos económico, mediante la aplicación de la política neo-monetarista de la escuela de Chicago y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Más del 30% de la fuerza laboral está cesante y se ha reducido drásticamente el valor real de los salarios. Ha disminuido la producción destinada al mercado interno. Han bajado las ventas del comercio. La deuda externa, que en 1973 era inferior a 4 mil millones de dólares, es hoy de 23 mil

millones. Durante el régimen fascista el país ha perdido alrededor de 40 mil millones de dólares sólo por la creciente diferencia entre el precio de los productos que le vende y el precio de los productos que le compra a los Estados Unidos y a otros países capitalistas industrializados. Chile carece hoy de la independencia que tenía durante el gobierno del presidente Allende. La crisis de estructura que lo afecta es ahora más aguda que nunca e impone la necesidad de transformaciones sustanciales en los más diversos órdenes de la vida nacional y, ante todo, en el carácter del Estado. Por tales motivos, nuestro Partido propicia un gobierno democrático avanzado, de amplia coalición, capaz de llevar adelante los cambios antiimperialistas y antioligárquicos que se precisan, democratizar todas las estructuras estatales, comprendidas las Fuerzas Armadas, reactivar la economía y encarar en forma resuelta la solución de los problemas del pueblo. Tal régimen sentaría las bases para la transición al socialismo.

Si a la dictadura le sucediera, en cambio, un régimen democrático de clara orientación burguesa, se trataría, claro está, de un progreso en relación al fascismo, pero ese régimen sería incapaz de sacar al país de la crisis, de resolver los problemas de fondo y ni siquiera de satisfacer las apremiantes necesidades de las masas. No obstante, le prestaríamos apoyo al gobierno que surgiera bajo tal signo en aquello que fuera claramente en interés del pueblo y del país. Al mismo tiempo, seguiríamos luchando en pos de cambios más profundos y de una democracia avanzada.

Salvador Allende hacía siempre una distinción interesante. Hablaba de enemigos y de adversarios, entendiendo por estos últimos a aquellos que sostenían posiciones discrepantes pero no antagónicas. Hoy los enemigos son Pinochet y su camarilla, que han pretendido y pretenden destruirnos, terminar con el comunismo y liquidar físicamente a los comunistas. Los adversarios, en la acepción de Salvador Allende, son personas con las cuales tenemos discrepancias y coincidencias. No comparten nuestra posición en favor del socialismo, pero con ellos nos unen objetivos comunes en lo inmediato y en el futuro mediano. Son fuerzas, en su mayoría progresistas, que luchan contra la

dictadura. Con muchos de los adversarios de este tipo marchamos de conjunto en favor de los intereses de los trabajadores y del pueblo y por el más pronto retorno a la democracia. Con algunos de ellos, en los niveles oficiales, las relaciones no son tan buenas. Tenemos permanentemente contactos y discusiones respetuosas. Pero nos exigen imposibles. Quieren que desdibujemos nuestra línea política y nos convirtamos en furgón de cola de la Alianza Democrática¹ y de sus nuevos aliados de la derecha. Pública y privadamente nos conminan a renunciar a la violencia en la lucha contra la dictadura, a emplear sólo formas de lucha pacíficas, a poner en práctica no nuestra política sino la política que nos pretenden dictar otros partidos, ante todo la Democracia Cristiana. Además, nos piden submarinear porque, según ellos, la presencia del Partido Comunista en el primer plano y en todo momento sería con frecuencia un factor desfavorable para avanzar en el camino de la recuperación democrática.

Los comunistas creemos que la evolución más probable de los acontecimientos conducirá a un enfrentamiento decisivo entre el pueblo y la dictadura. «Lo prevemos —dice el Informe al Pleno del Comité Central de nuestro Partido (1985)— como un levantamiento o sublevación de masas que involucre a toda la población, a la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales y ojalá también parte de las Fuerzas Armadas que estén contra la dictadura. Se trata de llegar a un estado de rebelión generalizada que logre la paralización real del país: alzamientos populares en los principales centros urbanos con la participación decidida del proletariado industrial, de los estudiantes, de las capas medias y del campesinado. Tales acciones se verían fortalecidas por golpes efectivos en apoyo a la paralización que ayuden a acelerar el desmoronamiento político-moral de las fuerzas represivas. La culminación de este proceso debiera ser el copamiento por las masas de los principales centros políticos del país»².

Por otra parte, hacen su camino tanto la movilización social que patrocina el Comando Nacional de Trabajadores como las ideas de la no-violencia activa y de la desobediencia civil, que han surgido del seno de los partidos que integran el Bloque Socialista³ y la Alianza Democrática.

Cuenta también con un amplio respaldo en las filas opositoras el propósito de marchar hacia un Paro Nacional de todas las actividades y crearle a Pinochet una situación de ingobernabilidad del país. Se recuerda al efecto el movimiento civil que abarcó a toda la ciudadanía y que condujo a la caída de Ibáñez el 26 de julio de 1931. Muchos creen que se podría reeditar.

Nuestra tesis acerca de una probable sublevación y los planteamientos e ideas que acabamos de citar contienen, a nuestro juicio, los elementos principales que podrían configurar una vía en cierto modo original, no identificable esquemáticamente con la vía armada ni con la vía no armada. Se trata de una vía que en la práctica pueda resultar cercana a una u otra y ser más o menos violenta o más o menos pacífica, en dependencia de la amplitud del movimiento, de la decisión y capacidad combativa de las masas y de los cambios que se puedan producir en la conducta y mentalidad de las Fuerzas Armadas y en la actitud que éstas asuman en los momentos decisivos.

No hay muralla china entre unas y otras formas de lucha. No son antitéticas ni irreconciliables, sino complementarias. Nosotros hablamos de rebelión y de sublevación del pueblo; otros hablan de desobediencia civil y de ingobernabilidad del país. Podríamos preguntar, ¿dónde está la diferencia conceptual? Si la hay, es sólo de matices. Vemos en todos estos planteamientos una actitud de lucha frente a la dictadura y una posición revolucionaria. En alguna medida, los protagonistas del proceso social aprendemos los unos de los otros y recogemos y asimilamos lo que nace de la práctica de las masas.

El desenlace que tenga la situación será —creemos— aproximado a lo que hemos descrito, aunque no se puede descartar otras variantes. Lo que descartamos y consideramos ilusorio es concertar con Pinochet una apertura democrática. En cambio, no la vemos imposible con las Fuerzas Armadas, al margen del tirano.

El imperialismo norteamericano, que prohijó el golpe de Estado en 1973 en colusión con la reacción interna, vuelve a demostrar una gran inquietud por la marcha de los acontecimientos en Chile y, en especial, por la fuerza del Movimiento Democrática Popular y del Partido Comunista. Uno

de sus emisarios, Laghorne Motley, que estuvo en el país, a su regreso a Washington dijo muy orondo: «Chile está en buenas manos». Todo indica que la envergadura de las luchas de nuestro pueblo ha llevado la alarma al Departamento de Estado. Pero que nadie se engañe. El gobierno de Reagan está interviniendo para tratar de evitar una solución verdaderamente democrática, y no para otra cosa. El imperialismo quiere impedir una salida avanzada y contra ella prefiere un cambio superficial que deje a salvo sus intereses. Pero, mientras le sea posible, trabajará con Pinochet. Por lo demás, en vano se ilusionan los políticos de centro-derecha. El imperialismo cuenta con aliados y también con vasallos y peones, pero a estos últimos no los puede poner o sacar en cualquier momento. Instalar en Chile a un dictador a su servicio le costó tres años. Con el tiempo, la criatura se infló, le tomó el gusto al poder, no tiene destino fuera de él y ahora sólo el pueblo puede echarla.

Lo básico, lo central y decisivo es la lucha de las masas y la acción coordinada de todas las fuerzas opositoras. Es esta lucha y esta acción la que tiene a mal traer a la dictadura. Es el factor principal de la agudización de la profunda crisis en que se debate el régimen. Es y será lo fundamental para llevar al movimiento por el mejor camino, cualesquiera sean las situaciones que se puedan presentar en el futuro inmediato.

En su discurso a la memoria de Sverdlov, el 18 de marzo de 1919, Lenin afirmó categóricamente que sin la violencia revolucionaria el proletariado ruso no habría podido vencer, pero agregó, con tanto o mayor énfasis, que «la violencia revolucionaria sólo es un método necesario y legítimo de la revolución en determinadas etapas de su desarrollo, únicamente en condiciones especiales y determinadas, y que una característica mucho más profunda y permanente de esta revolución y condición de su triunfo, es y será siempre la organización de las masas proletarias, la organización de los trabajadores. Y esta organización de millones de trabajadores constituye el mejor ámbito de la revolución, la fuente más profunda de su victoria»⁴.

Nosotros nos guiamos por estos principios, es decir, por considerar que lo más importante es el movimiento de ma-

sas y que el uso de la violencia y el grado y la oportunidad en que se practique dependen de las condiciones concretas. Esto significa que sin la lucha multitudinaria de las masas no se podría terminar con la tiranía y que la sublevación nacional que consideramos como lo más probable se hará realidad si surge objetivamente como la única salida y el pueblo la hace suya y se juega entero por ella.

La práctica de la lucha del pueblo de estos últimos años demuestra la justeza de estas formulaciones. Las jornadas de protesta que vienen realizándose desde mayo de 1983, las barricadas que en el curso de estas batallas se levantan en las poblaciones, los «apagones» en el servicio eléctrico a lo largo de la extensa red que cubre Chile, los ruidos de cacerolas y otros artefactos en días y horas predeterminados, los paros, las tomas de liceos o escuelas universitarias y los enfrentamientos callejeros con la policía, son formas de lucha que protagonizan centenares de miles y, en ocasiones, millones de personas. Si estas acciones las practican las masas en tal magnitud, es porque son de su propia creación, surgen en el curso mismo de la lucha y corresponden a su voluntad, sentimientos e intereses. La mayor parte de estas acciones derivan en duros enfrentamientos con las fuerzas represivas. Ocurre así, aunque muchas son de carácter pacífico o tienen un limitado componente de violencia. Para el régimen da lo mismo. Descarga la represión contra todas las manifestaciones de lucha, pacíficas o violentas. Los esbirros de la dictadura no permiten siquiera que la gente sepulte tranquilamente a sus muertos o visite sus tumbas y apalean y detienen hasta a personas que se manifiestan con un clavel o una vela en la mano, porque las flores y los cirios se han convertido en símbolos de la lucha por el derecho a la vida.

La disyuntiva a que se ve abocado cada hombre y mujer del pueblo no es la de elegir métodos violentos o métodos pacíficos, sino la de luchar o no luchar contra la tiranía.

Pasando por alto estas realidades tan evidentes, hay gente de oposición que sigue condenando la violencia «venga de donde venga». ¡Extraña posición, para decir lo menos! La mayor parte de los que hoy son enemigos a ultranza de la violencia apoyaron el golpe militar o guardaron absoluto silencio ante el baño de sangre y la feroz

represión que sufrió entonces el pueblo. En aquellos días y en los primeros años de dictadura, fuera de los partidos de izquierda, la única voz que se levantó fue la voz de la Iglesia Católica y de algunas figuras de la Democracia Cristiana, como Bernardo Leighton y Radomiro Tomic.

Los chilenos nos hemos vanagloriado de ser uno de los países que menos golpes de Estado han registrado en su historia y de haber llevado una vida republicana relativamente tranquila. Algo de verdad y mucho de mito hay en todo esto. Lo incuestionable es que la violencia ha estado presente, en mayor o menor grado, incluso bajo gobiernos democráticos. Basta recordar la «pacificación» a sangre y fuego de la Araucanía, el levantamiento de la Marina de Guerra en contra de Balmaceda y del antiguo ejército nacional, y el hecho de que la clase obrera ha sido objeto en Chile de persecuciones sistemáticas y de genocidios abyectos, desde la masacre de la Escuela Santa María hasta la matanza de El Salvador o Pampa Irigoín, pasando por las de Puerto Natales, Punta Arenas, San Gregorio, La Coruña, Ránquil, Plaza Bulnes, José María Caro y tantas otras. Colmando toda medida, el golpe fascista de septiembre de 1973 y el régimen dictatorial de Pinochet son los más brutales y sangrientos de la historia de América Latina.

Si nos atenemos a nuestra propia historia, la violencia casi siempre ha partido de las clases dominantes y hoy ocurre lo mismo. A despecho de esta realidad, hay gente que pone énfasis en criticar los actos que emanan de la justa ira del pueblo contra un régimen que lo hambrea y lo reprime.

La violencia es inherente a toda sociedad donde existen clases antagónicas. Las clases dominantes la suelen usar contra sus propios pueblos de la manera más brutal y despiadada para imponer sus intereses o contener los movimientos liberadores y luchas reivindicativas que amenacen sus privilegios y ganancias. Por su parte, los pueblos, en determinados momentos, se ven obligados a recurrir a la violencia cuando no encuentran otra forma de liberarse de sus opresores. Esto ha sido siempre así, desde los tiempos de Espartaco y aún antes, hasta nuestros días, pasando por la Revolución Francesa, la más importante de las revolu-

ciones protagonizadas por la burguesía, y por la más trascendental de todas, la Revolución Socialista de Octubre.

¿Quién podría negar estos hechos? Y ¿quién puede defender o apoyar la violencia contra el pueblo y criticar a éste cuando recurre a ella contra un régimen fascista, sin demostrar que lo que en definitiva le importa no es la violencia en sí, sino la clase que la pone en práctica y la dirección en que la emplea?

Antes de que planteáramos el derecho del pueblo a rebelarse y la legitimidad del uso de múltiples métodos de lucha, se nos decía que para arribar al entendimiento de todas las fuerzas democráticas se precisaba que nosotros, comunistas chilenos, renunciáramos al leninismo —lo cual significa también renunciar al marxismo— y atacáramos a la Unión Soviética. Ahora se pone el acento en otra cosa. El asunto de la violencia o el empleo de diversas formas de lucha se señalan por parte de la oposición de centro-derecha como obstáculos para el acuerdo con el Movimiento Democrático Popular y, particularmente, con los comunistas.

Es cierto que en estos asuntos tenemos diferencias. Las tenemos también en otros terrenos. Pero, de lo que se trata precisamente es de unirnos por sobre las diferencias para luchar juntos por la tarea principal de este momento, que es darle al país un régimen democrático.

Sigue siendo una verdad incuestionable lo que hemos venido reiteradamente planteando en el sentido de que se requiere terminar con las posiciones excluyentes, plasmar un acuerdo entre todas las fuerzas opositoras, desde la izquierda a la derecha, y colocar en el primer plano la salida del tirano, partiendo de la base —asaz evidente para todos los que tienen ojos y quieren ver, y oídos y quieren escuchar— de que a Pinochet hay que echarlo.

El Movimiento Democrático Popular representa a los sectores más avanzados y combativos de la izquierda chilena, y ninguna fórmula de salida tendrá el apoyo de masas necesario y la fuerza suficiente sin que él esté presente.

La política de exclusión del Partido Comunista y sus aliados más cercanos choca contra la voluntad y los intereses del pueblo. Por eso no prospera en la base social; al revés, allí se abre paso la unidad más amplia. Esta unidad

surge por doquier: en las poblaciones, en los sindicatos, en las universidades y liceos, entre los escritores y artistas, en los colegios profesionales y en muchos otros campos. Un gran ejemplo ha vuelto a dar la juventud, cuyas organizaciones políticas pertenecientes a los partidos del Movimiento Democrático Popular, del Bloque Socialista y de la Alianza Democrática suscribieron un acuerdo de acción común que es a la vez un llamado a la unidad de todas las fuerzas democráticas y antidictatoriales.

La Alianza Democrática está bajo la presión de un ala de la derecha que se vincula a ella imponiéndole tributos reaccionarios. La política de exclusiones es uno de ellos. Pero, en el seno de dicha Alianza hay también un considerable sector que está por el entendimiento con toda la izquierda. Por ejemplo, el Partido Radical, en su Convención (1985), aprobó un voto que establecía un plazo para que se aplicara una política de unidad sin exclusiones en el Frente Cívico que estaba entonces por formarse. A poco andar, se constituyó el llamado grupo de los 11 —de hecho, un frente cívico— con exclusión de los partidos del MDP y otros. Mucho antes, en declaraciones a la prensa, el dirigente socialista Ricardo Lagos (del partido que encabeza Carlos Briones) afirmó tajantemente que si la Alianza Democrática se reunía con el Partido Nacional, al día siguiente lo haría con el Partido Comunista. Como se sabe, la Alianza Democrática se ha reunido y concertado no sólo con el Partido Nacional sino también con el MUN, que está más a la derecha, y con personajes tan reaccionarios como Francisco Bulnes. La anunciada reunión con los comunistas quedó, en cambio, para las calendas griegas. Citamos hechos objetivos. No emitimos juicios u opiniones sobre los partidos o personas cuyas decisiones o declaraciones hemos recordado. Más aún, creemos que esos partidos o personas han sido sinceros en sus propósitos, que deben estar preocupados porque las cosas salieron de otra manera y probablemente se orientan a insistir en sus puntos de vista.

Los partidos de izquierda se han pronunciado en pro del entendimiento y de la acción común de todas las fuerzas opositoras. Lo mismo han hecho el Partido Humanista y las personalidades sin partido que integran la Intransigencia

Democrática. Es más que previsible que la evolución de los acontecimientos conduzca a los partidos de izquierda y a todos los que están por la unidad sin exclusiones a fortalecer y desarrollar sus contactos entre sí, aumentando con ello su gravitación en la búsqueda de ese acuerdo.

¡Que magníficas lecciones dio nuestro pueblo en las jornadas de septiembre del año 1985! Recapitemos los hechos. El Comando Nacional de Trabajadores había acordado llamar a una nueva Jornada de Protesta para el día 4. El día 26 de agosto se dio a conocer ampliamente el «Acuerdo para la Transición a la Plena Democracia». Es un documento que contiene demandas políticas muy sentidas por las masas y, a la vez, le quita el cuerpo a lo principal, la salida inmediata de Pinochet, ignora las reivindicaciones de los trabajadores, aborda el problema de la propiedad con criterio burgués y rehuye definiciones sobre otros asuntos fundamentales. En razón de sus virtudes y del anhelo general de buscar una pronta salida a la situación, dicho documento despertó algunas ilusiones en vastos sectores de la pequeña y mediana burguesía, que pensaban que bastaría con lo logrado para iniciar el camino triunfal hacia la democracia. Los cables de casi todas las agencias de noticias informaron de la euforia que reinaba en destacados dirigentes de la oposición de centro-derecha. El Departamento de Estado norteamericano dio su bendición al acuerdo concertado. El Cardenal Fresno dio gracias a Dios y a los dirigentes de los 11 partidos por el entendimiento al que habían arribado, y llamó al pueblo a no participar en la protesta del 4 de septiembre. La Alianza Democrática hizo un llamado sólo para que en esta jornada se recogieran firmas de adhesión a dicho acuerdo, dando a la vez la voz de orden en el sentido de que a las 2 de la tarde todo el mundo se retirara a sus domicilios. Lo que pasó, ya se sabe. La vida siguió otro curso. La jornada del 4 de septiembre se transformó en la más grande de todas las protestas habidas, en la más grande movilización combativa que haya tenido lugar en los años de dictadura.

Es un alto mérito del Movimiento Democrático Popular el hecho de haberse decidido por una posición firme y clara, sin perder de vista al enemigo principal. El MDP no adhirió al documento de los 11 partidos por los vacíos e insu-

ficiencias que contiene. Pero no se cruzó en el camino de quienes lo firmaron y siguió y sigue buscando la acción común con todos ellos. Tal actitud ayudó a que en la protesta del 4 de septiembre confluyeran las fuerzas opositoras de todas las tendencias y de las diversas capas sociales del pueblo.

Un papel relevante juega el Comando Nacional de Trabajadores, la instancia sindical más representativa, pluralista y unitaria. Es de justicia destacar la conducta de su dirección, que no se dejó arrastrar a la pasividad en las protestas de septiembre y puso en primer plano los intereses de los que viven de un sueldo o de un salario.

Concluamos con un reconocimiento honesto. Las diferencias en torno al problema de la violencia no tienen que ver con preceptos morales o principios humanistas que, creemos, compartimos todas las corrientes democráticas. Fundamentalmente, tienen que ver con el carácter de clase de los diversos proyectos políticos que sustentan las fuerzas opositoras. Estos son varios. El Movimiento Democrático Popular, en una firme posición revolucionaria propicia un régimen democrático avanzado con vista al socialismo, el Bloque Socialista está por un régimen democrático de orientación socialista y la Alianza Democrática como tal postula un régimen democrático de tipo burgués más o menos progresista, en tanto que entre las fuerzas de derecha que recientemente se han incorporado al grupo de los 11, hay quienes no hacen misterio de que están por la proscripción del Partido Comunista y de sus aliados, determinando así el carácter claramente antidemocrático de su proyecto político.

La forma en que termine la tiranía y los métodos que se empleen en la lucha por acabar con ella tienen directa relación con la posibilidad de plasmarse uno u otro de los mencionados proyectos o, dicho de otro modo, con el carácter, profundidad y trascendencia de la salida. En la prensa de Europa occidental se asimila el proyecto del grupo de los 11 a una salida «moderada» y «ordenada». No es una apreciación gratuita, pues corresponde al contenido de esa iniciativa y a las propias declaraciones de los dirigentes políticos chilenos de centro-derecha. Pero no es la única salida posible. Por nuestra parte, hemos dicho que

el camino del enfrentamiento es el más corto para terminar con la tiranía y es el que ofrece las mejores posibilidades para que, tras la derrota del fascismo, el país entre a un período de profundos cambios en la estructura del Estado y en todos los aspectos.

El preciso reconocer también que en el seno de la oposición se desarrolla una pugna por la hegemonía, por la primacía de la burguesía —y al fin de cuentas de la oligarquía financiera— o del proletariado y las capas medias en la dirección del movimiento social y en los destinos de Chile. Las diferencias en torno a proyectos políticos y a cuanto nos hemos venido refiriendo, en particular a la cuestión de la violencia y al uso de las más diversas formas de lucha, no son sino reflejos de esa pugna.

El Informe a la Conferencia Nacional de nuestro Partido se refiere a este problema en los siguientes términos: «La pugna por la hegemonía en el movimiento social y político es un hecho objetivo e inevitable. Ella no puede resolverse, no tiene solución mediante el enfrentamiento de las fuerzas que disputan la primacía, sino a través de una lucha común contra el enemigo común y de la confrontación en la práctica de las posiciones de cada cual. El pueblo es y debe ser, en esto y en todo, el supremo juez».

La cuestión capital que está planteada ante la oposición es la siguiente: ¿Debemos buscar un proyecto común y tácticas comunes para terminar con el régimen de Pinochet y elaborar de conjunto las tareas del gobierno provisional que suceda a la tiranía o, por el contrario, seguimos como hoy bregando cada cual por su propio proyecto y a su manera, sin perjuicio de los entendimientos ocasionales?

Los comunistas nos pronunciamos decididamente por buscar un proyecto común y tácticas comunes, aunque sólo sea para terminar con la dictadura, en el entendido, claro está, de que cada cual tiene derecho a mantener lo que es de su propia esencia.

La proposición hecha por el Comité Central de nuestro Partido en la carta a Gabriel Valdés⁵, en el sentido de configurar de conjunto una vía concreta que logre poner fin a la dictadura y al fascismo, es una proposición sensata y realista, teniendo en cuenta lo mucho que hay en común entre todas las fuerzas opositoras, exceptuando a la ultra-

derecha. La plataforma del Comando Nacional de Trabajadores surgida en la Asamblea de más de mil dirigentes sindicales que se realizó en agosto de 1985 puede ser la base del entendimiento de todas las fuerzas democráticas. Como se expresa en la carta del 6 de septiembre que nuestro Partido le dirigió al Cardenal Fresno, las medidas inmediatas que contiene el documento de los 11, más otras que consideran también los gravísimos niveles de miseria, hambre y cesantía que sufren los sectores más modestos, podrían convertirse en objetivos para la acción común por la que venimos abogando.

Andrés Zaldívar⁶ ha declarado a la revista «APSI» que «los dictadores buscan mantenerse en el poder por toda su vida. Y su poder sólo termina cuando Dios se acuerda de los pueblos y se los lleva o cuando los mismos pueblos los echan. Para esto existen dos caminos: o se enfrenta al dictador por la vía armada o se los enfrenta por medio de la movilización y la desobediencia que se traduce en presión social». Esta es una opinión interesante, que se podría discutir y precisar más, con vista a un entendimiento. Es importante, además, porque Andrés Zaldívar parte de la convicción de que Pinochet no se irá por su propia voluntad y concibe la movilización social y la desobediencia civil como una suerte de enfrentamiento al régimen, como «un proceso permanente y creciente de presión».

De no llegarse a un pronto entendimiento entre todas las fuerzas democráticas, manteniendo cada cual inamovible su propio proyecto y sin ceder en esto y en nada, se corre el riesgo de desaprovechar el momento actual, tan propicio para darle golpes contundentes a la dictadura y ponerla «en capilla».

Algunos piensan que el país podría terminar con la tiranía sin esta necesaria concertación. Sí, esto es posible. Los sufrimientos del pueblo, el hambre y la miseria que padecen millones de chilenos, la sed de justicia y el odio contra la tiranía, han convertido al país en un volcán. Son múltiples los signos indicativos de que puede producirse una gran explosión social. De otro lado, se mueven desesperadamente los sectores que están por una salida «moderada» y «ordenada» y, en el seno de las Fuerzas Armadas, que constituyen virtualmente el último sostén del régimen, está

en desarrollo un acelerado proceso de descrédito del dictador. Pero, de cualquier modo, seguirá planteada la necesidad de un acuerdo de las más amplias fuerzas democráticas, porque la situación de hoy y de mañana sería inmanejable si prevaleciera la dispersión.

Los comunistas chilenos, cualesquiera sean las vicisitudes de la vida y los sacrificios que la lucha nos imponga, continuaremos en la primera línea de batalla enfrentando a la dictadura fascista por todos los medios y con entera decisión, junto a las masas y en estrecha ligazón con nuestros aliados. Al mismo tiempo, como parte de esta lucha, seguiremos defendiendo nuestros principios, nuestra línea de clase y nuestra política de lucha y de unidad de todas las fuerzas democráticas contra la tiranía.

Esta política tiene como norte exclusivo el interés del pueblo. En este interés, estamos por un régimen de respeto a los derechos humanos, que erradique el fascismo y las prácticas de la tortura y el crimen político. Lo que buscamos es un régimen democrático bajo el cual el pueblo determine soberanamente los destinos de la patria. Somos el partido más consecuentemente democrático, en el pensamiento y en los hechos. Queremos entendernos con todas las corrientes progresistas para trabajar en conjunto con la mayor eficiencia a fin de hacer realidad lo antes posible el anhelo de eliminar la dictadura.

En manos del pueblo, pero sobre todo de la clase obrera, está la posibilidad de que los acontecimientos se desarrollen por el mejor camino. Si este camino desemboca en un régimen democrático avanzado, el Partido Comunista seguirá sosteniendo su política en favor de la más amplia alianza de las fuerzas sociales, sin exclusión de ningún sector progresista, porque las transformaciones que Chile requiere necesitan de la participación y de la lucha conjunta de la mayoría ciudadana.

Revista Internacional, N° 1 de 1986

¹ Integran la Alianza Democrática el Partido Demócrata Cristiano, la Derecha Republicana, el Partido Socialdemócrata, el Partido Radical, un sector del antiguo Partido Socialista y el Movimiento Liberal. —N. de la Red.

² *Partido Comunista de Chile. –Boletín del Exterior, 1985, No 71 (extraordinario), p. 37.*

³ Forman parte del Bloque Socialista: el sector del antiguo Partido Socialista que integra a la vez la Alianza Democrática, la Izquierda Cristiana, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y un sector del MAPU Obrero-Campesino. –*N. de la Red.*

⁴ V.I. Lenin. *Obras Completas*, 2ª ed., Cartago, Buenos Aires, t. XXX, p. 429.

⁵ Presidente del Partido Demócrata Cristiano y de la Alianza Democrática. –*N. de la Red.*

⁶ Dirigente del PDC; desde diciembre de 1982 presidente de la Internacional Demócrata Cristiana. –*N. de la Red.*

Victoria de la lucha y de la unidad

Eduardo VIERA,
miembro del Comité Ejecutivo
del CC del Partido Comunista del Uruguay (PCU)

Dos hechos fundamentales resaltan de los resultados de las elecciones generales del 25 de noviembre en el Uruguay: en primer lugar, la derrota de la dictadura que se había instalado a raíz del golpe de estado de 1973; en segundo lugar, el importante avance del Frente Amplio, antioligárquico y antimperialista, lo que abre amplias perspectivas para el ulterior avance del proceso socio-político.

La dictadura fue derrotada por una vía muy peculiar, pocas veces vista en la historia; en las elecciones que ella misma tuvo que organizar, el pueblo votó masivamente por el retorno a un régimen democrático, a un gobierno constitucional, por el retorno y el respeto a las libertades públicas. Es el resultado de 11 años de resistencia y combativas luchas. Se instalan las nuevas Cámaras Legislativas –Senadores y Diputados–, con una decisiva mayoría de representantes de los sectores opositores, y asume el Presidente electo por el pueblo.

Los mandos militares vuelven a los cuarteles. Se cumple un gran objetivo estratégico: terminó la dura y negra etapa del terror y del intento de institucionalizar un Estado fascista en el Uruguay. Se abre una nueva etapa, que no estará exenta de problemas, de luchas sociales y democráticas, ante todo para acabar con las excrecencias legadas por el régimen; pero será en el terreno de la vigencia de la Constitución, de la presencia de las organizaciones populares, sindicales, gremiales, de la acción pública y legal de las fuerzas políticas y sus órganos de expresión.

Una vez más constatamos que no nos son indiferentes las formas del Estado; el pueblo uruguayo ha hecho una